

PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN. SE ACUERDA LA ADOPCION. Se acuerda la adopción del niño por parte de la familia adoptiva y estableciendo que el primer apellido de los adoptantes se anteponga a los de la familia natural del adoptado. Sentencia Audiencia provincial de Valladolid de 11 de marzo 2021. **Número Sentencia: 38/2021 Número Recurso: 467/2020. Ponente: FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA** .Origen instancia 13

abecera: ADOPCION

Jurisdicción: Civil

Ponente: FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA Ir a

Origen: Audiencia Provincial de Valladolid

Fecha: 11/03/2021

Tipo resolución: Auto **Sección:** Primera

Número Sentencia: 38/2021 **Número Recurso:** 467/2020

Numroj: AAP VA 246:2021

Ecli: ES:APVA:2021:246A

Abogados: Ismael Rincon Arconada Ir a

Audiencia Provincial de Valladolid, de 11/03/2021 RES:38/2021 REC:467/2020

ENCABEZAMIENTO:

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

VALLADOLID

AUTO: 00038/2021

Modelo: N10300

C.ANGUSTIAS 21

Teléfono: 983.413486 **Fax:** 983413482/983458513

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MSV

N.I.G. 47186 42 1 2019 0012971

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000467 /2020

Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 13 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: X07 ADOPCION 0000679 /2019

Recurrente: Susana

Procurador: MARIA HENAR SANCHEZ PALOMINO

Abogado: ISMAEL RINCON ARCONADA

Recurrido: MINISTERIO FISCAL, JUNTA CASTILLA Y LEON GERENCIA TERRITORIAL SERVICIOS SOCIALES

Procurador: ,

Abogado: , LETRADO DE LA COMUNIDAD

AUTO N° 38/2021

Ilmos. Sres. MAGISTRADOS:

D. FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA

D. FRANCISCO SALINERO ROMÁN

D. JOSÉ-RAMÓN ALONSO-MAÑERO PARDAL

En Valladolid, a once de marzo de dos mil veintiuno.

Visto en grado de apelación el presente procedimiento de Adopción núm. 679/19 del Juzgado de 1ª Instancia núm. 13 de Valladolid, seguido entre partes, de una como **DEMANDANTE-APELADA la GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES**, defendida por el LETRADO DE LA COMUNIDAD y de otra como **DEMANDADA-APELANTE Dña. Susana** , representada por la Procuradora Dña. MARÍA HENAR SÁNCHEZ PALOMINO y defendida por el Letrado D. ISMAEL RINCÓN ARCONADA, con la intervención como apelado del **MINISTERIO FICAL**.

[Ir arriba](#)

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Se aceptan los hechos de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 19/10/2020, se dictó auto cuya parte dispositiva dice así:

"SE ACUERDA: constituir la adopción de la menor de edad María Consuelo a favor de la pareja formada por Don Francisco y Doña Agustina promovida en la propuesta previa de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León de Valladolid, con extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y sus padres biológicos, y estableciendo que el primer apellido de los adoptantes se anteponga a los de la familia natural del adoptado."

TERCERO.- Notificado a las partes el referido auto, por la Procuradora Dña. María Henar Sánchez Palomino en representación de D. Dña. Susana, se interpuso recurso de apelación dentro del término legal, alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria y por el Ministerio Fiscal se presentaron sendos escritos de oposición al recurso de apelación. Remitidos los autos del juicio a este Tribunal y personadas las partes, se señaló para la celebración de la vista el día 24/02/2021, tras la Deliberación, al acordar el Tribunal diligencias finales por Auto de fecha 25/01/2021, y en que ha tenido lugar lo acordado.

VISTOS, siendo Magistrado-Ponente el **Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA**.

[Ir arriba](#)

FUNDAMENTOS DE DERECHO:**PRIMERO.-OBJETO DEL RECURSO.**

Por la representación procesal de Susana se formula recurso de apelación contra el auto de fecha 19-10-2020 dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Valladolid, que, desestimando la oposición de la hoy apelante a la adopción de su hija biológica sin su asentimiento por considerar que está incurso en causa de privación de la patria potestad, constituye a dicha menor en adopción.

La parte apelante, con evidente defecto de técnica procesal, reproduce íntegramente en su recurso el contenido de su escrito de oposición a la adopción sin su asentimiento formulado en la primera instancia, y, en síntesis, alega que:

1. El auto apelado incurre en error en la valoración de la prueba porque, en contra de lo que se sostiene en el auto, al tiempo de la declaración del desamparo, no se habían agotado por parte de la Administración competente todas las posibilidades y medios de intervención y ayuda familiar, los cuales se limitaron al corto periodo que media entre el mes de marzo al mes de septiembre de 2019.
2. No consta la razón por la cual la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en Valladolid (en lo sucesivo, la GTSS) no pudo contactar con la apelante para darle audiencia antes de resolver sobre la guarda con fines adoptivos, conforme al art. 176 bis C.C.
3. Que la situación de la madre biológica ha cambiado desde la fecha de la declaración de desamparo en octubre de 2017. Ahora tiene un domicilio estable en virtud de contrato de arrendamiento, donde convive con su actual pareja y con su padre, y dicha unidad familiar puede hacer frente con sus ingresos al alquiler y suministros de la vivienda y a la alimentación y vestido propios y de la menor.

La GTSS apelada se opone al recurso de apelación formulado de contrario e interesa la confirmación del auto por sus propios fundamentos que transcribe en su práctica totalidad, añadiendo que la parte apelante, como ya hiciera en su demanda, insiste en desviar el objeto del proceso hacia una impugnación de las actuaciones de la GTSS, cuando no estamos ante un procedimiento de oposición a las medidas adoptadas en protección de los menores, por lo que no procede la invocación de una eventual mejora en las condiciones personales y económicas de la demandante.

El Ministerio Fiscal se opone al recurso de apelación e interesa la confirmación del auto por sus propios fundamentos, añadiendo **que no basta la** evolución positiva de la madre biológica que manifiesta tener pareja estable desde hace un año, **sino que debe** primar el interés de la menor y la eliminación del riesgo de un nuevo desamparo, menor que se halla plenamente integrada en la familia de acogida preadoptiva, **con la que tiene ya sentimientos de pertenencia**, que cubre todas sus necesidades y le aporta la necesaria estabilidad y seguridad.

SEGUNDO.-SOBRE EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO.

El presente proceso, tramitado conforme a lo previsto en el **art. 781 LEC** ., es el **"proceso contradictorio"** al que se refiere el art. 177.2.2º del C.C., y tiene por objeto apreciar si el progenitor biológico se halla incurso o no en causa de privación de la patria potestad a los efectos de decidir si su asentimiento a la adopción es o no necesario.

La primera pregunta que surge entonces **es qué momento debe contemplarse a la hora de valorar si el progenitor está incurso o no en causa de privación de la patria potestad**, porque, por lo que ahora interesa, de ordinario es largo el camino desde que se adopta la declaración administrativa de desamparo hasta que se formula la propuesta de adopción.

La sentencia de instancia hace suya la tesis mantenida por el Letrado de la GTSS y considera que el momento en que debe ponerse el foco para decidir si el progenitor está o no incurso en privación de la patria potestad es el de la declaración de desamparo.

Según esta tesis, seguida por ciertas Audiencias Provinciales, es irrelevante lo que ocurra tras la declaración de desamparo y, por ello, carece de objeto la práctica de toda prueba sobre el particular.

Otras Audiencias Provinciales, sin embargo, se inclinaron por una visión dinámica de la cuestión y entendieron que debe valorarse no solo la situación existente en el momento de la declaración de desamparo, sino cómo ha evolucionado dicha situación hasta el momento en que se formula la propuesta de adopción.

A nuestro juicio, la tesis de la visión estática se basa en un automatismo que se compadece mal con la propia existencia del proceso contradictorio previsto en el art. 177.2.2º C.C. y con las posibilidades alegatorias y probatorias inherentes al mismo. Si la situación de desamparo presupone ya que los progenitores no han ejercido sus deberes de patria potestad, es obvio que los mismos estarán en ese momento incursos en causa de privación de la patria potestad y, en consecuencia, sobraría cualquier discusión posterior sobre el particular.

Esta visión estática del problema centrada exclusivamente en el momento de la declaración de desamparo del menor resulta además contraria a la doctrina constitucional, de la que se hace eco la STS **565/2009** , de 31 de julio, según la cual, dada la importancia de los intereses de orden personal y familiar de los menores, de los padres biológicos y de los restantes afectados, debe admitirse un menor rigor formal en este tipo de procesos, que no se configuran como un simple conflicto entre pretensiones privadas, sino que se amplían *ex lege* las facultades del Juez en garantía de los intereses que han de ser tutelados, entre los que ocupa una posición prevalente el interés del menor. En este sentido, STC **58/2008** , de 28 de abril. La misma doctrina ha consagrado la legitimidad constitucional de la que llama "la exclusión de la preclusividad" (SSTC **75/2005** , de 4 de abril, **58/2008** , de 28 de abril), es decir, de la exclusión de los

efectos del principio de preclusión, según el cual la clausura de una fase o plazo procesal impide replantear lo ya decidido en ella.

La expresada STS 565/2009 , termina por declarar como doctrina legal en un caso de oposición a la declaración de desamparo pero que, *mutatis mutandi*, resulta trasladable al caso de adopción que ahora nos ocupa que:

"Es procedente que el juez, al examinar la impugnación de la declaración de desamparo por la Administración interpuesta al amparo del artículo 172.6 CC , contemple el cambio de circunstancias producido con posterioridad al momento en que se produjo la declaración con el fin de determinar si los padres se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad. "

Tal discrepancia entre Audiencias Provinciales ha sido abordada y resuelta por el Tribunal Supremo en el sentido de que, si bien ha de partirse de la situación existente en el momento de la declaración de desamparo, ello no excluye la posibilidad de valorar una modificación posterior de las circunstancias, bien entendido que, mientras está en vigor la declaración de desamparo, se presume que continúe el incumplimiento de los deberes paterno filiales y corresponderá demostrar lo contrario a quien lo niegue. En este sentido, entre otras, STS 36/2012 , de 6 de febrero y 315/2014 , de 6 de junio.

Analizaremos, pues, a continuación, la situación existente al tiempo de la declaración de desamparo y si posteriormente, al tiempo de la propuesta de adopción, si se ha producido una modificación relevante de las circunstancias.

TERCERO.- SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES AL TIEMPO DE LA DECLARACIÓN DE DESAMPARO DE LA MENOR.

Con carácter previo debemos salir al paso de las manifestaciones realizadas por el Letrado de la GTSS y del Ministerio Fiscal en el informe que formularon en la vista tras la práctica de las diligencias finales acordadas en el sentido de que no estimaban necesario remontarse al principio del expediente.

Este Sala no puede compartir tales afirmaciones.

La decisión que adopte esta Sala va a tener una enorme trascendencia y gravedad: de desestimarse el recurso de apelación quedará constituida la filiación adoptiva y en principio se extinguirá todo vínculo entre la menor y su madre biológica.

Y ello pese a que, como dice la STS 565/2009 ,

"el principio de reinserción en la propia familia que, junto con el interés del menor, aparece recogido en el artículo 172.4 CC como uno de los principios que rigen en materia de protección de menores desamparados, está proclamado en la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 3 de diciembre de 1986 y en el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el día 30 de noviembre de 1990, y ha sido reconocido, en relación con los derechos de los padres biológicos, por el TC a partir de la STS 298/1993, de 18 de octubre. "

Las diligencias finales acordadas tenían por finalidad precisamente aquilatar debidamente todas las circunstancias del caso en decisión de tanta trascendencia, acudir

a la fuente directa de la prueba, esto es, a los informes y testimonios de los técnicos del CEAS y de la Diputación que dieron origen a las posteriores actuaciones de la GTSS que han culminado con la propuesta de adopción en la que la misma GTSS postula que no es necesario el asentimiento de la progenitora.

Este Tribunal de apelación, tras una atenta lectura del expediente de Protección de menores 985/2017 de la GTSS, pudo observar cómo las sucesivas resoluciones e informes se apoyaban en lo que decían los anteriores en el mismo expediente, así hasta remontarse al primero de ellos que, supuestamente, se hacía eco a su vez de los informes de los técnicos del CEAS y del equipo de intervención familiar de la Diputación. Pero esas referencias sucesivas y basadas supuestamente en los informes originarios del CEAS y del equipo de la Diputación eran descripciones genéricas o referencias valorativas realizadas por los propios técnicos de la GTSS; es decir, hablaban de que la madre mantenía comportamientos de escasa habilidad parental, agresivos, desordenados, de riesgo o de desapego para la menor, pero no describían cuales eran los concretos hechos que conformaban tales comportamientos. Y cuando se referían a la deficiencia psíquica de la madre, en ningún momento mencionaban su clase, naturaleza y origen, o en qué medida afectaba al ejercicio de la maternidad, ni el informe médico que la acreditaba.

De esta forma, se venía a hurtar a esta Sala la posibilidad de valorar por sí misma todos estos hechos y, con ellos, la concurrencia o no de causa de privación de la patria potestad en el momento de la declaración de desamparo.

La valoración de los hechos es una potestad exclusiva de los Tribunales de Justicia que no puede quedar suprimida por un ejercicio de fe en los juicios de valor formulados por las resoluciones e informes de la GTSS. La regla *da mihi factum, dabo tibi ius*, como no podía ser de otra forma, también opera en materia de adopción.

En suma, **en contra de lo que sostuvieron en sus conclusiones el Letrado de la GTSS y el Ministerio Fiscal**, no se trataba de volver al inicio del expediente, ni de cuestionar las resoluciones administrativas ya dictadas y, en su caso, ratificadas judicialmente (como en el caso de la sentencia desestimación de la oposición a la declaración administrativa de desamparo, por cierto tampoco incorporada el expediente y solo aportada *in extremis* en la vista de las diligencias finales). Se trataba, simplemente, al amparo de lo establecido en el **art. 752.1, segundo párrafo LEC** ., de salir de oficio a la búsqueda de una prueba que debería haber figurado en el expediente de la adopción,

Pues bien, a **la vista de la prueba documental y testifical practicada en esta segunda instancia**, este Tribunal ha podido comprobar que las descripciones genéricas y valorativas realizadas en las resoluciones y en los informes de la GTSS responden a la realidad de unos hechos que justifican considerar que la progenitora sí se encontraba incurso en causa de privación de la patria potestad al tiempo de la declaración de desamparo.

La trabajadora social del CEAS de DIRECCION000, la educadora y la psicóloga del Programa Atención a Familias de la Diputación de Valladolid, han narrado en sus informes y en su declaración, entre otros, los siguientes hechos relevantes:

1. La intervención de los servicios sociales y asistenciales comienza en febrero de 2017 a petición de su tía Esther con la que la progenitora convive, que muestra su preocupación por el régimen de vida de Susana a la que no puede

controlar, que, además, mantenía una mala relación con el padre de la niña que esperaba y que había sido agredida por un amigo de este último.

2. Aunque no consta en autos su específico diagnóstico, Susana presenta una discapacidad intelectual reconocida del 70%, y presenta una conducta habitual caracterizada por las deficiencias en la higiene personal, la búsqueda constante de relaciones afectivas, a veces a través de las redes sociales, los cambios bruscos de humor, y las reacciones impulsivas e, incluso, agresivas en cuanto se siente incomodada o se le lleva la contraria, manifestadas con grandes voces, insultos, amenazas y lenguaje malsonante, portazos y salidas intempestivas del lugar donde los servicios asistenciales se reunían con ella.

3. Durante el embarazo la progenitora, si bien manifestó su deseo de tener el bebé, no modificó en nada su comportamiento y mantuvo sus desordenadas idas y venidas del domicilio de sus tíos en la localidad de DIRECCION001 donde entonces residía, y varias relaciones sentimentales breves y conflictivas. Además, rechazó cuanto ayuda se le ofreció y respondió a dicho ofrecimiento de manera agresiva e impulsiva, poniéndose a la defensiva y negándose a ser visitada en su domicilio.

4. Tras el nacimiento de la niña el NUM000 de 2017, Susana mostró muy poca destreza para el cuidado del bebé y mala predisposición para aprender dichas habilidades, por más que se le asignó una auxiliar para asistirle y enseñarla diariamente. Prueba de ello es que Susana delegaba en su tía Esther la mayor parte de las funciones de cuidado y demandaba frecuentemente ayuda de las vecinas para cuidados elementales como cortar las uñas, limpiar las fosas nasales o dormir al bebé.

5. Tras el nacimiento de la niña el equipo asistencial comenzó a recibir de los vecinos información muy preocupante sobre la conducta de Susana con la menor. Dichas informaciones referían cómo Susana gritaba a la niña por la noche expresando que la iba a "tirar por la ventana" o que "se arrepentía de haberla tenido" y que "la iba a regalar al primero que pasase".

En otra ocasión, los vecinos relataron cómo Susana soltó el cochecito del bebé en una cuesta abajo o cómo la casa donde residía con la menor y sus tíos presentaba deficiencias higiénicas, en ella vivían animales sueltos y carecía de agua caliente. Igualmente, los tíos de Susana refirieron que continuaba con sus citas sentimentales por internet y que a alguna de ellas acudía con la niña.

6. Pese a que también recibió ayuda de una psicóloga y de una educadora del equipo de la Diputación, Susana continuó sin mostrar interés en su interacción con la niña, evitaba cogerla y cuando lo hacía no la miraba y se distraía con el móvil o la televisión.

7. El programa de intervención familiar termina cuando el día 19 de septiembre de 2017, tras una discusión con la auxiliar sobre la cantidad de biberón que hay que darle a la niña, Susana tiene una reacción explosiva y arroja violentamente al bebé sobre el sofá con graves riesgos para su integridad, al tiempo que pronuncia frases contra ella como "ojalá hubiera abortado" o "me estás amargando la vida". Cuando unos días después el equipo de intervención le interroga sobre el suceso, Susana lo niega, no asume su culpa y abandona la

reunión entre gritos e insultos. Se acuerda entonces una nueva cita, que se fija para el 2 de octubre, a fin de valorar la posibilidad de continuar la intervención, pero Susana no acude a la cita. El equipo de intervención decide entonces poner en conocimiento de la GTSS los anteriores acontecimientos a efectos de una eventual declaración de desamparo.

8. A la vista de todos estos acontecimientos, la GTSS dictó Acuerdo de fecha 10 de octubre de 2017 declarando a la menor en situación de desamparo y asumiendo su tutela legal. Formulada oposición a dicha declaración por la progenitora, la misma fue ratificada por Sentencia de 11 de febrero de 2019.

Los hechos narrados permiten afirmar que al tiempo de la declaración de desamparo la apelante estaba incurso en causa de privación de la patria potestad por manifiesta inhabilidad para cumplir los deberes de cuidado inherentes a la misma previstos en el art. 154 C.C. con grave riesgo para la menor.

CUARTO.- SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE DESAMPARO DE LA MENOR.

Conforme a la doctrina jurisprudencial que hemos expuesto *ut supra*, si bien ha de partirse de la situación existente en el momento de la declaración de desamparo, ello no excluye la posibilidad de valorar una modificación posterior de las circunstancias, bien entendido que, mientras está en vigor la declaración de desamparo, se presume que continúe el incumplimiento de los deberes paterno filiales y corresponderá demostrar lo contrario a quien lo niegue.

Dicha doctrina debe ser completada ahora con la que también sienta la ya citada STS *565/2009*, y que, igualmente, *mutatis mutandi*, resulta aplicable al caso de la adopción de litis, según la cual:

"Para acordar el retorno del menor desamparado a la familia biológica [en nuestro caso, para decidir sobre si es necesario o no el asentimiento de la progenitora] no basta con una evolución positiva de los padres biológicos, ni con su propósito de desempeñar adecuadamente el rol paterno y materno, sino que es menester que esta evolución, en el plano objetivo y con independencia de las deficiencias personales o de otro tipo que puedan haber determinado el desamparo, sea suficiente para restablecer la unidad familiar en condiciones que supongan la eliminación del riesgo de desamparo del menor y compensen su interés en que se mantenga la situación de acogimiento familiar en que se encuentre teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, el tiempo transcurrido en la familia de acogida, si su integración en ella y en el entorno es satisfactoria, si se han desarrollado vínculos afectivos con ella, si obtiene en la familia de acogida los medios necesarios para su desarrollo físico y psíquico, si se mantienen las referencias parentales del menor con la familia biológica y si el retorno al entorno familiar biológico comporta riesgos relevantes de tipo psíquico."

Y ello porque habrá que tener siempre en cuenta la primacía del interés y beneficio del menor (art. 39 de la Constitución, Convenios Internacionales de Nueva York y Convención de las Naciones Unidas de 1989), sobre el legítimo interés de los padres biológicos de recuperar a su hijo.

Trasladando toda esta doctrina al caso de litis resulta que:

1. La progenitora continúa padeciendo los mismos déficits de habilidad para el cuidado de la menor, la misma falta de atención cuando se hace cargo de la niña con el correspondiente riesgo para su integridad, y la misma falta de predisposición para recibir ayuda y aprender dichas habilidades parentales, tal y como se desprende del acuerdo de la GTSS de 17-11-2017 por el que se acuerda la suspensión del régimen de visitas supervisadas y que se hace eco de los informes de los técnicos del Punto de Encuentro Familiar. Dichos informes narran episodios de atragantamiento de la menor por la insistencia de la madre en darle un zumo que la niña no quería y por la inadecuada postura en que la colocó, y episodios de peligro de caída por dejar a la menor en el cambiador sin prestarle atención. Igualmente se describen comportamientos impulsivos y agresivos, especialmente hacia la familia de acogida, con incumplimiento de las normas de las visitas, hasta el punto en que fue necesaria la intervención policial. Todo ello determinó la suspensión del régimen de visitas.
2. La posibilidad de superar estos déficits mediante la ayuda de otras personas y de los servicios sociales no aparece en un examen del conjunto de circunstancias como suficientemente segura, por existir antecedentes de rechazo por la madre biológica de la ayuda de parientes y de los servicios sociales para la debida atención a la menor.
3. Finalmente, desde diciembre de 2017 la madre se ha desentendido de su hija con la inane explicación de que un funcionario de la GTSS le había indicado por teléfono que ya no tendría más visitas. Sólo cuando se le ha comunicado la propuesta de adopción rectora de los presentes autos la madre ha tomado la iniciativa para que la misma no pueda llevarse a efecto sin su asentimiento.
4. El propósito ahora expresado por la madre biológica de asumir su rol parental y de atender adecuadamente a la menor en sus nuevas circunstancias familiares y personales (nuevo domicilio con contrato de alquiler, nueva pareja, convivencia con el abuelo paterno, posibilidades económicas de la unidad familiar) no es por sí suficiente para destruir la presunción de incumplimiento de deberes paterno filiales derivada, según hemos ya explicado, de la previa declaración de desamparo y, menos aún, para probar que, paralizado el proceso de adopción por no contar con su asentimiento, la eventual y futura reintegración al entorno de la familia biológica sea adecuada al interés de la menor y elimine un nuevo riesgo de desamparo.

Las circunstancias concurrentes no permiten afirmar que tal paralización proteja el interés para la menor dados los hechos que se destacan en los informes periciales obrantes en autos acerca del tiempo transcurrido en acogimiento residencial y familiar y después, en acogimiento preadoptivo con la familia adoptante, su satisfactoria integración en ella y la idoneidad de los adoptantes, la falta de referencias parentales por su corta edad de la menor hacia su madre, el riesgo de desajuste físico y psíquico que podría producirse y, sobre todo, el riesgo de nuevas situaciones de desamparo en caso de un eventual reintegro a la familia biológica.

El recurso de apelación, pues, debe ser desestimado.

TERCERO.-COSTAS.

De conformidad con los arts. 398 y 394 de la LEC ., teniendo en cuenta las dudas de hecho concurrentes en el presente caso que han motivado la práctica excepcional de diligencias finales, no procede hacer expresa condena en costas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. El Rey y por la potestad jurisdiccional que la **Constitución Española** nos concede.

[Ir arriba](#)

FALLO:

LA SALA ACUERDA:

Que, **desestimando** el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Susana contra el auto de fecha 19-10-2020 dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Valladolid, debemos confirmar y confirmamos el expresado auto en todos sus pronunciamientos.

No se hace especial pronunciamiento de las costas procesales causadas en el presente Recurso de Apelación.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así, por este nuestro auto, del que se unirá certificación al rollo de apelación, notificándose a las partes, lo disponemos y firmamos.

.